



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital
AMBIENTE

12: 7873

RESOLUCIÓN No 7873

"POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN No. 758 DEL 24 DE JUNIO DE 2004, Y SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA"

EL DIRECTOR DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

En ejercicio de las facultades delegadas mediante la Resolución 3691 de 2009, en concordancia con el Acuerdo 257 de 2006, los Decretos Distritales 109, 175 de 2009 y lo prescrito en el Código Contencioso Administrativo, el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Resolución 1197 de 2004 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Código Contencioso Administrativo,

ANTECEDENTES

Que mediante la **Resolución No. 758 del 24 de Junio de 2004**, el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, hoy, Secretaría Distrital de Ambiente, ordenó el cierre definitivo de la explotación minera desarrollada en la **FABRICA DE TUBOS SANTA ISABEL**, ubicada en la Carretera a Usme Km11 Vereda Yomasa, con nomenclatura Carrera 5 Este No. 74F-53 Sur o Calle 74F Sur No. 4C-30 de la localidad de Usme de esta Ciudad, de propiedad de la señores **MARIA AURORA MALAGON Y PEDRO JULIO VEGA MALAGON**.

Que dentro de la Resolución descrita anteriormente esta autoridad ambiental resolvió:

(....)

"ARTICULO SEGUNDO: Exigir al propietario y/o propietarios de la FABRICA DE TUBOS SANTA ISABEL, la presentación de un Plan de Recuperación Morfológica y Ambiental para el predio afectado con la actividad minera, en el término de sesenta días calendario, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, de conformidad con los términos de referencia anexos.

ARTICULO TERCERO: Imponer a la FABRICA DE TUBOS SANTA ISABEL, la medida preventiva de suspensión de actividades de emisión de contaminantes a la atmosfera



Rd 2000 CR 26121

Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital
AMBIENTE

82 7873

producto de la actividad de fabricación de tubos de gres...."

Que mediante Auto No. 1133 del 25 de junio de 2004, el Departamento Administrativo de Medio Ambiente DAMA hoy Secretaría Distrital de Ambiente, inicio proceso sancionatorio en contra de **MARIA AURORA MALAGON Y PEDRO JULIO VEGA MALAGON**, propietarios de la **FABRICA DE TUBOS SANTA ISABEL**, por el presunto incumplimiento, la Ley 99 de 1993, la resolución 619 de 1997 y el Código de Recursos Naturales Renovables.

Que a través del Auto 1134 del 25 de junio de 2004, el Departamento Administrativo de Medio Ambiente DAMA hoy Secretaría Distrital de Ambiente formulo pliego de cargos a los propietarios de la **FABRICA DE TUBOS SANTA ISABEL**.

Que la resolución 1160 del 24 de Mayo de 2007, declaró responsables a los señores **MARIA AURORA MALAGON Y PEDRO JULIO VEGA MALAGON**, propietarios de la **FABRICA DE TUBOS SANTA ISABEL**, por los cargos primero y segundo, formulados mediante el artículo primero del Auto No 1134 del 25 de junio de 2004, referentes a las actividades desarrolladas en la fábrica de tubos, ubicada en la Carretera a Usme Km11 Vereda Yomasa, con nomenclatura Carrera 5 Este No. 74F-53 Sur o Calle 74F Sur No. 4C-30 de la localidad de Usme de esta Ciudad.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que a través del Concepto Técnico No. 5657 del 21 de Abril de 2008, la Dirección de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, de acuerdo con la visita técnica efectuada el día 3 de Marzo de 2008, al predio donde funciona la **FABRICA DE TUBOS SANTA ISABEL**, estableció lo siguiente.

(....)

La empresa se ubica en la UPZ 57 Gran Yomasa, Área de Actividad Residencial, conforme a la información obtenida en la página web de la Secretaría Distrital de Planeación, por lo tanto las actividades industriales desarrolladas no pueden continuar desarrollándose.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
AMBIENTE

7873

5.3. La FÁBRICA DE TUBOS SANTA ISABEL ha venido trabajando sin el permiso de emisiones atmosféricas, el cual requiere de acuerdo con el numeral 2.3 la Resolución ó 19 de 1997.

5.4. La empresa se ubica fuera de las zonas compatibles con la minería y no se encuentra en zona compatible con actividades industriales, conforme a la información obtenida en la página web de la Secretaría Distrital de Planeación, por lo cual no es viable otorgar permiso de emisiones.

5.5. Independiente de las acciones que tome la DLA se recomienda:

Imponer cierre definitivo de las actividades de beneficio y transformación desarrolladas por Ladrillera Santa Isabel, debido a que no es viable otorgar permiso de emisiones..."

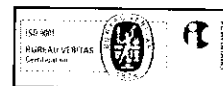
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que esta Dirección realizó el análisis jurídico, revisión de los documentos y actos administrativos obrantes dentro del expediente, encontrando sobre el acto administrativo **No. 758 del 24 de Junio de 2004**, lo siguiente:

Que la Ley 99 de 1993, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, establece "el cierre definitivo" en su artículo 85, numeral 1 literal 3, como una **SANCIÓN** que debe ser impuesta por la autoridad ambiental una vez se agotan las etapas procesales establecidas en el decreto 1594 de 1984, norma aplicable para el momento en el que tuvieron ocurrencia los hechos, materia sobre la cual tubo fundamento la resolución No 762 del 24 de Junio de 2004. Por lo que establece claramente que nos encontramos ante una sanción, y no ante una medida preventiva; por lo que esta Entidad debió garantizar la observancia al debido proceso a quien se investiga.

La citada ley establece en el parágrafo del artículo 85 lo siguiente:

"Parágrafo 3º.- Para la imposición de las medidas y sanciones a que se refiere este artículo se estará al procedimiento previsto por el Decreto 1594 de 1984 o al estatuto que lo modifique o sustituya."





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital
AMBIENTE

Nº 7073

Que en este sentido, el Decreto Ley 1594 de 1984 estableció el procedimiento ambiental sancionatorio, en el cual y en concordancia con la Ley 99 de 1993, el cierre definitivo del establecimiento, impuesto a la **FABRICA DE TUBOS SANTA ISABEL** mediante la **Resolución No. 758 del 24 de Junio de 2004**, debió imponerse como consecuencia de un proceso sancionatorio ambiental cuya consecuencia en la decisión sería la imposición del cierre definitivo, sin embargo y como obra en el expediente esta situación no ocurrió, siendo la actuación administrativa contraria a la ley.

Que por lo anteriormente expuesto se observa que el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente –DAMA-, hoy Secretaría Distrital de Ambiente, incurrió en error interpretativo respecto de la Resolución 222 del 3 de agosto de 1994, mediante la cual se determinaron zonas compatibles para las explotaciones mineras de materiales de construcción en las Sabana de Santafé de Bogotá, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, conculcando con ello el derecho del debido proceso, en razón a que no se tuvo en cuenta las formas propias del debido proceso a que esta sujeto dentro de los procesos sancionatorios por la presunta violación a las normas sobre protección ambiental y manejo de recursos naturales renovables, dado que contrario a lo establecido en el procedimiento especial sancionatorio (Decreto 1594 de 1984, *Norma aplicable para el momento en que tuvieron ocurrencia los hechos que sirvieron como fundamento para imponer la SANCION*), la administración no dio cumplimiento a lo dispuesto en su artículo 197 y siguientes, al imponer una sanción, como lo es el cierre definitivo temporal o definitivo de establecimientos, edificaciones o servicios, con lo cual se privó al investigado de la oportunidad procesal de ejercer en su momento el derecho de contradicción y defensa que le asiste conforme a nuestro ordenamiento jurídico.

Que sobre este caso en particular es importante destacar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso es aplicable a toda clase de actuaciones judiciales administrativas, e incluye como elemento básico del mismo la observancia "de la plenitud de las formas propias de cada juicio", lo que en materia administrativa significa el pleno cumplimiento de lo prescrito en la ley y en las reglas especiales sobre el asunto en trámite, para evitar que la decisión del ente administrador vulnere los derechos del investigado.

Que el debido proceso en los asuntos administrativos implica que el Estado se sujete a las reglas definidas en el ordenamiento jurídico, en las actuaciones que se adelanten contra los particulares para deducir responsabilidades relativas al control y vigilancia de





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital
AMBIENTE

7873

su actividad. El artículo 29 de la Constitución señala que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, e incluye como elemento básico del mismo la observancia "de la plenitud de las formas propias de cada juicio", lo que en materia administrativa significa el pleno cumplimiento de lo prescrito en la ley y en las reglas especiales sobre el asunto en trámite. En último término, de lo que se trata es de evitar que la suerte del particular quede en manos del ente administrativo sin la debida sujeción a las normas que los procedimientos especiales señalan como de obligatorio cumplimiento.

De acuerdo al estudio realizado a las actuaciones administrativas obrantes en el expediente DM-06-97-145 y DM-08-04-758 de la **FABRICA DE TUBOS SANTA ISABEL** se observa expedir la Resolución No. 758 del 24 de Junio de 2004, que impuso el cierre definitivo de la explotación minera se vulnera el derecho al debido proceso, siendo tal determinación contraria a la ley, por lo que se procederá a revocar en este aspecto el presente acto administrativo.

Que en virtud de lo establecido en el Artículo 2º de la Ley 1333 del 2009, esta autoridad ambiental, tiene la facultad de imponer y ejecutar las medidas preventivas a que haya lugar con el objeto de impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra los recursos naturales, el paisaje o la Salud Humana.

Que una vez conocido el hecho generador del impacto ambiental mediante Concepto Técnico No. 5657 del 21 de Abril de 2008, se genera la necesidad de imponer la medida preventiva de suspensión de actividades descrita en el Artículo 39 de la ley 1333 de 2009, consistente en la orden de cesar la ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana.

Es decir, el acto administrativo por el cual la autoridad ambiental adopta decisiones, sin la certeza científica absoluta, en uso del principio de precaución, debe ser **excepcional y motivado**. Y, como cualquier acto administrativo, puede ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto hace que la decisión de la autoridad se enmarque dentro del Estado de Derecho, en el que no puede haber decisiones arbitrarias y caprichosas, y que, en el evento de que esto ocurra, el ciudadano tiene a su disposición todas las herramientas que el propio Estado le otorga. En este sentido no hay violación del debido proceso, garantizado en el artículo 29 de la Constitución"

Bajo estos parámetros, se estima que la decisión adoptada de cerrar definitivamente la





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital
AMBIENTE

7873

actividad minera desarrollada por la **FABRICA DE TUBOS SANTA ISABEL**, con fundamento en los diferentes conceptos técnicos expedidos por la Subdirección Ambiental Sectorial del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente – DAMA, hoy Secretaría Distrital de Ambiente, se expidió ilegalmente, toda vez que existió trasgresión al debido proceso.

Que la revocatoria de los Actos Administrativos de carácter particular, tiene por objeto el restablecimiento del orden jurídico, del interés público o social y el derecho que tiene toda persona que se le garanticen sus derechos y no se le cause agravio alguno sin justificación, por lo tanto es deber de la administración retirar sus propios actos.

Que la Constitución Política en su artículo 8º, señala como obligación del Estado y de las personas, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. Así mismo, en el artículo 79, establece que *"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano..."*, y en su artículo 80 señala que *"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados"*.

Que así mismo el artículo 79 de la Carta Magna, determina entre otras cosas que *"Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de dichos fines"*.

Que igualmente, el Ordenamiento Constitucional señala en su artículo 95, que toda persona está obligada a cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano, establece en su numeral 8º el de: *"Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano"*.

Que el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 asignó a los grandes centros urbanos funciones de elaborar, revisar y expedir los actos administrativos por medio de los cuales se otorguen o nieguen permisos, salvoconductos, licencias, autorizaciones, concesiones y demás instrumentos de manejo y control ambiental de competencia de este Ente Administrativo, así como los actos administrativos que se consideren necesarios para adelantar el procedimiento cuya finalidad sea el licenciamiento ambiental, el otorgamiento de permisos, concesiones y/o autorizaciones y demás instrumentos de





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital
AMBIENTE

70 7273

control ambiental. Que así mismo el literal L del artículo 3° del Decreto Distrital 561 del 29 de diciembre de 2006, asignó la función a la Secretaría Distrital de Ambiente de ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales renovables.

El los artículos 69 y 71 del código Contencioso Administrativo establecen:

"Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona..."

"Oportunidad. La revocación podrá cumplirse en cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en firme o aún cuando se haya acudido a los tribunales contencioso administrativos, siempre que en este último caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda..."

Lo anterior para significar que la decisión a tomar en el presente Acto Administrativo procede en cualquier tiempo, aún estando el Acto en firme.

Que es así como la administración se basa en los principios orientadores emanados del Código Contencioso Administrativo y en su artículo 3° expresa lo siguiente: "Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción"

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados".

(...)

"En virtud del principio de eficacia, se tendrán en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias..."

Que en el caso sub examine, procede la revocación de la Resolución No. 762 del 24 de Junio de 2004 "Por la cual se ordena el cierre definitivo de la actividad minera, y se





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital
AMBIENTE

Nº 7873

adoptan otras disposiciones", por cuanto se encuentran inconsistencias y faltas a la Ley y la Constitución, según lo establecido en el numeral 1º del artículo 69 del CCA.

Que a pesar que el interesado no ha solicitado la revocatoria de la Resolución No. 758 del 24 de Junio de 2004, es deber de esta Secretaría conforme al rigor jurídico que se tiene en cuanto al desarrollo de las investigaciones administrativas de carácter ambiental, proceder entonces a la revocatoria oficiosa del mismo, e imponer una Medida Preventiva de Suspensión de Actividades de beneficio y transformación desarrolladas en la **FABRICA DE TUBOS SANTA ISABEL**.

Que es del caso anotar, que este Despacho procedió a revocar de oficio el acto administrativo ya mencionado, al encontrar debidamente justificadas, faltas a la Ley y la Constitución.

Que el Artículo 71 del Código Contencioso Administrativo, establece que la revocatoria podrá cumplirse en cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en firme o aun cuando se haya acudido a los tribunales contencioso administrativo, siempre que en este último caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda.

Que la doctrina ambiental y concretamente el Dr. Luis Carlos Sáchica en "*La Revocatoria de los actos administrativos; Protección Jurídica de los administrados*", Ediciones Rosaristas: 1980, conceptuó lo siguiente: "*...Lo normal es que los actos jurídicos contrarios al derecho sean anulados por los tribunales de justicia, pero en el campo del derecho administrativo y especialmente dentro de nuestro país, se le ha permitido a la misma administración pública que proceda a dejarlos sin efecto, por virtud de los recursos del procedimiento gubernativo, o en razón de la **revocatoria** directa, **oficiosa** o a petición de parte. La administración pública es de las pocas organizaciones que tiene el privilegio de retirar sus propios actos. Y así por ejemplo vemos que los particulares tienen que llevar sus desacuerdos ante los estrados judiciales, cuando surjan motivos para la invalidación de sus actos jurídicos. La administración pública pues, tiene la potestad suficiente para tutelarse a si misma, habida consideración que su actividad siempre debe estar sujeta al derecho, y por ende el autocontrol de la juridicidad en sus propias manos no es sino la expresión correlativa de este mismo principio...*" (Negritillas fuera del texto)





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
AMBIENTE

NO 7873

Que numeral 6º del artículo 1º. de la Ley 99 de 1993, indica que *"...las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente"*.

Que el capítulo XII de la Ley 99 de 1993, relacionado con las sanciones y medidas de policía, atribuye funciones de tipo policivo a las autoridades ambientales, al establecer en el artículo 83: *"El Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones establecidas por la ley, que sean aplicables según el caso"*.

Que la ley 1333 del 21 de julio de 2009, que regula el procedimiento sancionatorio ambiental y dicta otras disposiciones, indica en su Artículo 66. *"Vigencia"*. La presente Ley rige a partir de su promulgación, deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Capítulo XI, artículos 116 y ss. del Decreto 948 de 1995 y subroga los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993.

Sin embargo la citada ley establece en el Artículo 64. *"Transición de procedimientos"*. El procedimiento dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984.

Que respecto de la aplicación de la norma es del caso precisar que se transgredió el derecho al debido proceso en las actuaciones procedimentales que motivaron la resolución 762 del 24 de junio de 2004, las cuales fueron fundadas en la ley 1594 de 1984, sin dar la debida aplicación proceso sancionatorio ambiental cuya consecuencia en la decisión sería la imposición del cierre definitivo.

Así las cosas, en relación con la actuación ambiental de carácter sancionatorio surtida dentro del expediente DM-06-97-145 y DM-08-04-758, en contra de la FABRICA DE TUBOS SANTA ISABEL, ésta Secretaría considera pertinente señalar lo dispuesto en el





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital
AMBIENTE

7873

Parágrafo 3º del artículo 85 de la Ley 99 de 1993, en el que se estipula que: *"Para la imposición de las medidas y sanciones a que se refiere este artículo se estará al procedimiento previsto por el Decreto 1594 de 1984 o al estatuto que lo modifique o sustituya."*

Que el Decreto 1594 de 1984, definió el proceso sancionatorio en los artículos 197 y siguientes, no obstante dicho régimen no contiene la figura de la caducidad administrativa, razón por la cual y, frente al vacío de la norma, nos remitimos a lo dispuesto en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, en el cual establece que: *"Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas."*

Que la revocatoria directa es la facultad de la cual está investida la administración con el objeto de salvaguardar el ordenamiento jurídico de manera oficiosa o a petición de parte.

Que mediante Acuerdo 9 de 1990, el Concejo de Bogotá creó el Departamento Administrativo del Medio Ambiente - DAMA.

Que con la expedición de la Ley 99 de 1993, específicamente en su artículo 66, se otorgó a los *"Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón (1'000.000) de habitantes ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano"*.

Que con fundamento en dicha norma, mediante Decreto Distrital 673 de 1995, se reformó la estructura interna del Departamento, para la asunción de sus funciones de autoridad ambiental dentro del perímetro urbano.

Que mediante Acuerdo 257 de 30 de noviembre de 2006, el Concejo de Bogotá dispuso transformar el Departamento Administrativo del Medio Ambiente - DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente, como un organismo del sector central, con autonomía administrativa y financiera.

Que mediante Decreto Distrital No. 109 de 16 de marzo de 2009, se modificó la estructura interna de la Secretaría Distrital de Ambiente, asignándole, entre otras, la





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital
AMBIENTE

Nº 7873

función de "...ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia".

Que el literal I del artículo primero del Decreto Distrital No. 175 de 04 de mayo de 2009, por el cual se modificó el Decreto Distrital No. 109 de 16 de marzo de 2009, establece, a cargo del Secretario de Ambiente la competencia para *"Emitir los actos administrativos para el otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones, licencias ambientales, salvoconductos de movilización y demás instrumentos de control y manejo ambiental, medias preventivas y sancionatorias a que haya lugar"*.

Que mediante Resolución No. 3691 de 13 de mayo de 2009, el Secretario de Ambiente del Distrito Capital delegó en el Director de Control Ambiental, entre otras, la función de *"Expedir los actos administrativos de iniciación, permisos, registros, concesiones, autorizaciones, medidas preventivas, y demás pronunciamientos de fondo de todos aquellos actos administrativos que decidan solicitudes y tramites ambientales de competencia de la Secretaria Distrital de Ambiente"*

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR directamente en toda y cada una de sus partes la **Resolución Nº 758 del 24 de Junio de 2004** *"Por la cual se ordena el cierre definitivo de la actividad minera, imponen unas medidas preventivas y se adoptan otras disposiciones"*, en contra de la **FABRICA DE TUBOS SANTA ISABEL**, ubicada la Carretera a Usme Km11 Vereda Yomasa, con nomenclatura Carrera 5 Este No. 74F-53 Sur o Calle 74F Sur No. 4C-30 de la localidad de Usme de esta Ciudad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Imponer a la FABRICA DE TUBOS SANTA ISABEL, medida preventiva de suspensión de la actividad minera en la fase de extracción, beneficio y transformación, así como la carga y transporte de materiales de construcción procedentes del predio, y cualquier otro tipo de actividad minera que pueda desarrollarse en la propiedad ubicada en la Carretera a Usme Km11 Vereda Yomasa, con nomenclatura Carrera 5 Este No. 74F-53 Sur o Calle 74F Sur No. 4C-30, de la





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital
AMBIENTE

Nº 7873

Localidad de Usme de esta ciudad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría Distrital Ambiental podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución.

PARÁGRAFO.- Cualquier contravención a lo señalado anteriormente, será causal para la aplicación de las sanciones legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar la presente providencia a los señores, a los señores **AURORA MALAGON Y PEDRO JULIO VEGA MALAGON** en la Carrera 5 Este No. 74F-53 Sur o Calle 74F Sur No. 4C-30 de la Localidad de Usme de esta Ciudad.

ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el contenido del presente acto administrativo en la página web de la entidad en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 71 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO.- Contra la presente providencia no procede recurso alguno y se entiende agotada la vía gubernativa de conformidad con el artículo 63 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

GERMÁN DARÍO ÁLVAREZ LUCERO
Director de Control Ambiental

30 DIC 2010

Proyectó: Omar Hernando Garzón Sánchez

Revisó: Álvaro Venegas Venegas

Helga Margarita Gómez

Aprobó: Octavio Augusto Reyes Avila - Subdirector de Recursos hídricos y del Suelo

Concepto Técnico No. 5657 del 21 de Abril de 2008

EXP. DM-06-97-145 DM08-04-758

Minería



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA
www.secretariadeambiente.gov.co



NOTIFICACION PERSONAL

Bogotá, D.C., a los 27 Ene 1962 27 días del mes de ENERO del año (2011), se notifica personalmente al Resolución 7073/240 a señor (a) Jesús Arnaldo Castañeda en su calidad de Actriz

identificado (a) con Cédula de Identificación No. 19.158.250 de Bogotá del C.S.J. quien fue informado que contra esta resolución no procede ningún recurso

EL NOTIFICADO:
Dirección: Q.T. J. M. J.
Teléfono (s): TRU. 6 ESTE. N° 0-62.
246 4520
CUIPEN NOTIFICA: Anely Paola García.